



NUE 72-ADP-2019 (AG)

██████████ contra el Instituto Salvadoreño del Seguro Social

Resolución Definitiva

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las once horas con dos minutos del tres de octubre de dos mil diecinueve.

Descripción del Caso

El presente procedimiento de apelación ha sido promovido por ██████████
██████████, en adelante el apelante, contra la resolución emitida por la oficial de información del **Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)** el 21 de junio de este año.

I. El apelante presentó a la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) del ISSS, solicitud de datos personales consistente en: i) Copia simple del formulario llenado y rematado con observaciones por el suscrito, el día 1 de mayo de 2019, al momento de la propuesta de remisión del suscrito a interconsulta con un psiquiatra del ISSS, calzada y rubricada por el jefe de emergencia y del director de la Unidad Médica Zacamil; ii) El historial clínico de las atenciones médicas que el solicitante ha recibido en el ISSS en el período comprendido entre el primero de febrero de 2019 y el 15 de mayo de 2019, en un documento simple, expedido por autoridad local competente del ISSS, de la Unidad Médica Zacamil, del Hospital Policlínico Arce, del Hospital de Especialidades, del Hospital General y del Hospital Médico-quirúrgico, todos del ISSS, calzado con la firma de la autoridad responsable y con el sello estampado de la dependencia; iii) El historial clínico detallado, incluyendo la medicación pormenorizada de los medicamentos y de su posología, que le fueron suministrados al suscritos en las atenciones médicas que el solicitante ha recibido en el ISSS en el período comprendido entre el 1 de mayo de 2019 y el 4 de mayo de 2019, en un documento simple, expedido por autoridad local competente del ISSS, de la Unidad Médica Zacamil, del Hospital Policlínico Arce, del Hospital de Especialidades, del Hospital



General y del Hospital Médico-quirúrgico, todos del ISSS, calzado con la firma de la autoridad responsable y con el sello estampado de la dependencia, y; iv) El historial clínico de atenciones médicas que el solicitante ha recibió en el ISSS en el período comprendido entre el primero de febrero de 2015 a la fecha, en una Certificación”.

Dicho ente obligado, a través de su oficial de información resolvió las peticiones contenidas en los ítems ii, iii y iv; sin embargo, el apelante impugna la resolución, debido a que no se brindó información contenida en el ítem i de su requerimiento; no obstante, haberse aclarado que no se encontraron consultas del mes de mayo de 2019, de acuerdo a escrito remitido por la Dirección del Hospital Policlínico Zacamil en fecha 12 de junio del corriente año.

II. El Instituto admitió la apelación y se designó al comisionado **Andrés Gregori Rodríguez**, para instruir el procedimiento y elaborar un proyecto de resolución. Asimismo, se requirió al **ISSS** que remitiera el expediente de la UAIP relacionado al presente caso y el informe de justificación de conformidad con el Art. 88 de la LAIP.

En plena observancia y respeto al Derecho de Defensa que debe imperar en todo procedimiento, de conformidad con el artículo 88 de la LAIP, se corrió traslado al **ISSS** para que rindiera su informe. En dicho informe, el **ISSS** —en lo medular—, a través de su titular **Herbert Rolando Rivera Alemán** ratificó lo resuelto por su oficial de información, y manifestó que, según consta en el expediente administrativo, “se logró ubicar la existencia de un formulario emitido en la fecha 1 de mayo de 2019, el cual corresponde a la atención recibida en el Hospital General y que contiene observaciones realizadas por el peticionario; asimismo, se verificó la existencia de su correspondiente referencia e ingreso al Hospital Policlínico Arce con fecha 1 de mayo del 2019”.

También, remitió certificación del formulario de consentimiento informado, donde consta el ingreso en el Hospital General el día 30 de abril de 2019 y su posterior ingreso en el Hospital Policlínico Arce, ello a fin de evidenciar la confusión manifiesta del apelante respecto de los lugares en los que este realizó sus consultas médicas.

III. La audiencia oral se realizó solo con la comparecencia del ente obligado. El ISSS a través de su apoderada, reafirmó lo contenido en el expediente administrativo anteriormente remitido por parte de dicho ente.

Análisis del caso

Una vez establecido lo anterior, el examen del caso seguirá el orden lógico siguiente: (I) Algunas consideraciones sobre la protección de datos personales; (II) breve análisis sobre la inexistencia de la información; y (III) los efectos de esta resolución conforme a los hechos probados.

I. De acuerdo a la resolución definitiva emitida por este Instituto en fecha 9 de marzo de 2018, en el procedimiento de imposición de sanciones de referencia NUE 3-DDP-2017, por dato personal se entiende toda aquella información relativa a un individuo identificado o identificable que, entre otras cosas, le dan identidad, lo describen, precisan su origen, edad, lugar de residencia, trayectoria académica, laboral o profesional. Asimismo, señalan aspectos sensibles o delicados sobre tal individuo, como es el caso de su domicilio, teléfono, sus características físicas, ideología o vida sexual, entre otros¹.

a. Asimismo, el Art. 31 de la LAIP establece que el derecho a la protección de datos personales, consiste en que: *"Toda persona, directamente o a través de su representante, tendrá derecho a saber si se están procesando sus datos personales; a conseguir una reproducción inteligible de ella sin demora; a obtener las rectificaciones o supresiones que correspondan cuando los registros sean injustificados o inexactos y a conocer los destinatarios cuando la información sea transmitida, permitiéndole conocer las razones que motivaron su petición, en los términos de esta ley. El acceso a los datos personales es exclusivo de su titular o su representante"* (la negrita es nuestra).

En ese orden de ideas, la Sala de lo Constitucional en la Sentencia Definitiva de Amparo del día 4 de marzo de 2012 con referencia 934-2007, reconoció que la protección de los datos personales es el medio por el cual se salvaguarda los objetivos de la faceta material

¹ Concepto retomado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de los Datos Personales de los Estados Unidos Mexicanos (INAI), en su resolución de fecha 1 de febrero de 2017, de referencia RRA 3995/16.



del derecho a la autodeterminación informativa, por un conjunto de derechos subjetivos, deberes, principios, procedimientos, instituciones y reglas objetivas, teniendo este su fundamento en el principio de seguridad jurídica, establecido en el Art. 2 de la Constitución de la República (Cn); asimismo, estableció que la protección de este derecho, pretende satisfacer la necesidad de las personas de preservar su identidad ante la revelación y el uso de los datos que les conciernen, y que este no puede limitarse a determinado tipo de datos — sensibles o íntimos—; lo decisivo, es la utilidad y el tipo de procesamiento que de los mismos se haga, pues se requiere conocer el contexto en que se utiliza o se pretenda utilizar.

Por ello, el grado de sensibilidad o intimidad del dato personal ya no depende si afecta o no la esfera íntima o privada de la persona, hace falta conocer la relación de utilización de un dato para poder determinar sus implicaciones con el individuo; es decir, determinar la verdadera finalidad y qué posibilidades de interconexión y de utilización existen, solo así se podrá descifrar la licitud de las restricciones al derecho a la autodeterminación informativa o protección de datos personales.

Este derecho también se encuentra reconocido en los tratados de derechos humanos que forman parte del orden jurídico salvadoreño, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 12), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 17), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Art. 11) y la Convención sobre los Derechos del Niño (Art. 16); al interpretar estas disposiciones, los Organismos Internacionales han destacado la noción de las garantías respecto de los registros personales y corporales, las relacionadas con la recopilación y registro de información personal en bancos de datos y otros dispositivos.

b. Por otro lado, es pertinente señalar que dentro de esos derechos subjetivos que componen el derecho a la protección de datos personales, se encuentra el derecho de acceso (Art. 36 letras “a”, “b” y “c” de la LAIP) y el derecho de rectificación a los datos personales (Art. 36 letra “d” de la LAIP), que de acuerdo a la jurisprudencia constitucional² el primero es la *“facultad que implica la posibilidad de comprobar si se dispone de información sobre uno mismo y conocer el origen del que procede y la finalidad que se persigue”*; y, el segundo

² Sentencia Definitiva emitida por la Sala de lo Constitucional, en el Amparo del día cuatro de marzo de 2012 con referencia 934-2007.

es el derecho de solicitar *“la modificación de los datos que aparecen erróneamente consignados y obtener así la integración de los que sean incompletos”*.

II. En este punto, es importante mencionar que el Art. 73 de la LAIP dispone que cuando la información solicitada no se encuentra en los archivos de la unidad administrativa correspondiente, el oficial de información tomará las medidas pertinentes para localizarla en la dependencia que se encuentre, y, en caso de no encontrarla, expedirá una resolución que confirme su inexistencia.

Este Instituto ha reconocido con anterioridad como causales que pueden dar lugar a la inexistencia de la información las siguientes: a) que nunca se haya generado el documento respectivo; b) que el documento se encuentre en los archivos del ente obligado pero se haya destruido por su antigüedad, fuerza mayor o caso fortuito; y, c) que la información haya estado en los archivos de la dependencia o entidad y la inexistencia se derive de su destrucción, en este caso deberá verificarse si ésta se realizó de conformidad con las disposiciones vigentes en ese momento, o bien, si la destrucción se hizo de manera arbitraria³.

Por otra parte, es atinente señalar que la inexistencia implica necesariamente que la información **no se encuentra en los archivos de la autoridad** –; es decir, se trata de una cuestión de hecho –; no obstante, que la dependencia o la autoridad cuente con las facultades para poseer dicha información. En este sentido, es de señalar que la inexistencia es un concepto que se atribuye a la información solicitada⁴.

Además, en resoluciones emitidas por este Instituto⁵, se han tomado como base los **criterios emitidos por la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA)**, y en relación a la inexistencia de la información ha establecido que: “se deberá fundar y motivar que la información solicitada no existe, y para ello, se deberá acreditar que se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos materiales y en su caso, digitales, consignando los requisitos que den certeza de que la búsqueda fue realizada de manera minuciosa, tales como: i) que se turnó la solicitud de acceso a todas las áreas competentes que pudieran contar con

³ Resolución Definitiva LAIP 39-A-2013, del 28 de octubre de 2013.

⁴ Criterio /00015-09, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos de México.

⁵ Resolución definitiva LAIP 143-A-2017, emitida el 11 de diciembre de 2017.



la información requerida, con el propósito de que, en su caso la localizaran y manifestaran si se encontraba disponible; ii) que se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la información y que estas fueron las adecuadas para atender el caso concreto; iii) que el criterio de búsqueda utilizado fue el adecuado: amplio y extensivo (es decir, no restrictivo); iv) que de la búsqueda efectuada no se localizaron documentos o información que den cuenta de lo solicitado; y, v) la precisión, en su caso, de que se procedió a la destrucción de la información por cuestiones de la vida útil, en los términos de la ley de que se trate. Cuando posterior al análisis de la inexistencia de la información, se determine que la misma debería existir en virtud de que deriva del ejercicio de facultades, competencias o atribuciones de la autoridad (sujeto obligado), ésta deberá generarse o reponerse en los casos que sea posible”.

En ese sentido, la inexistencia de la información decretada por los entes obligados, **no debe ser utilizada como un límite al DAIP o al acceso a Datos Personales** de los solicitantes de la información, pues deben probar que han realizado las diligencias necesarias para su obtención o reconstrucción y futura entrega de la información.

III. Una vez establecido lo anterior, es pertinente señalar que, en un inicio la oficial de información resolvió que: *“La Dirección del Hospital Policlínico Zacamil remitió respuesta en la que se aclara que no se encontraron consultas del mes de mayo 2019, por lo que no fue proporcionado lo requerido”*; no obstante, posteriormente, en el informe justificativo rendido por el ente obligado se hace la aclaración que se verificó la existencia de un formulario emitido en fecha 1 de mayo de los corrientes, y en el que se hace constar el posterior ingreso del apelante al Hospital Policlínico Arce en esa misma fecha.

Determinados los hechos probados, derivados de las pruebas presentadas por ambas partes, corresponde analizar los efectos de la presente resolución, con el fin de garantizar las pretensiones del apelante.

1. En el presente caso, ha quedado demostrado que la información existente en las bases de datos del ISSS discrepa respecto de lo solicitado por el apelante en el ítem i de su requerimiento, ello al considerarse la prueba ofrecida por dicho ente obligado, consistente en: a) Certificación del expediente administrativo de la solicitud de información 6814, en el que a folios 21, 24 y 25 consta el informe remitido por el Hospital Policlínico Zacamil y los

registros de agenda médica y emergencias; y b) Certificación del formulario de consentimiento informado, donde consta el ingreso en el Hospital Policlínico Arce, donde se logra evidenciar que el apelante ingresó al Hospital Policlínico Arce durante el mes de mayo del corriente año y no a la Unidad Médica Zacamil como indica el apelante, manifestando de forma evidente la confusión del señor [REDACTED] desembocando ello en un requerimiento de información inexistente.

2. Por otro lado, ha quedado probado que en fecha primero de mayo del corriente año, el señor [REDACTED] firmó formulario de autorización en la que se plasma que voluntariamente y con pleno conocimiento a través de dicho instrumento declaró estar informado de su condición de salud; a su vez, se comprueba que el instrumento previamente mencionado fue calzado en el Hospital Policlínico Arce, ya que, es el sello oficial de dicho hospital el que yace en el mencionado formulario; por tanto, corresponde confirmar la resolución de la oficial de información del ISSS.

Sin embargo, con el afán de garantizar el derecho al acceso a su información personal del apelante, máxime cuando que se trata de su historial de tratamiento de salud mental, en aplicación a los principios de verdad material y el derecho a una buena administración, es pertinente ordenar al ISSS, fotocopia certificada de los folios treinta y ocho y treinta y nueve del expediente clínico del paciente [REDACTED] que se encuentra en los archivos del Hospital Policlínico Arce.

Decisión del caso:

Por tanto, de conformidad con las razones antes expuestas y disposiciones legales citadas, y con los Arts. 6 y 18 de la Cn., 36, 94, 96 letra “d” y 102 de la LAIP, este Instituto resuelve:

a) **Confirmar** la resolución emitida por la oficial de información del **Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)**, en el expediente 6814/2019 por las pruebas y razones antes expuestas, referente a la información siguiente: Copia simple del formulario llenado y rematado con observaciones por el suscrito, el día 1 de mayo de 2019, al momento



de la propuesta de la remisión del suscrito a interconsulta con un psiquiatra del ISSS, calzada y rubricada por el Jefe de Emergencia y del Director de la Unidad Médica Zacamil.

b) **Ordenar** al ISSS que, a través de su oficial de información, en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de esta resolución, entregue al apelante [REDACTED], fotocopia certificada de los folios treinta y ocho y treinta y nueve del expediente clínico de su persona que se encuentra en los archivos del Hospital Policlínico Arce.

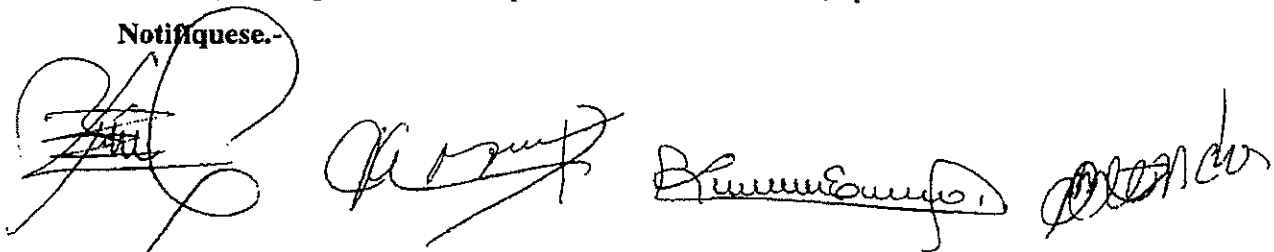
c) **Ordenar** al ISSS que remita a este Instituto un informe de cumplimiento, en el plazo de veinticuatro horas vencidos todos los plazos, que incluyan todas las diligencias efectuadas, la entrega de la información consignada en la letra b) de esta resolución, o notificación al apelante así como su recepción. Este informe puede ser remitido por vía electrónica a la dirección: oficialreceptor@iaip.gob.sv.

d) **Hacer saber** a las partes que contra este acto administrativo no cabe recurso en esta sede administrativa, de conformidad con el Art. 131 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dejando expedito el derecho de acudir a la jurisdicción Contencioso Administrativo, si así se considerase necesario.

e) **Remitir** el presente expediente a la Unidad de Cumplimiento de este Instituto para que verifique el cumplimiento de esta resolución.

f) **Publíquese** la versión pública de esta resolución, oportunamente.

Notifíquese.-



PRONUNCIADA POR LAS COMISIONADAS Y LOS COMISIONADOS QUE LA SUSCRIBEN.

CS

...conforme a su original, con la cual se confrontó y para que lo proveído por este Instituto tenga su debido cumplimiento, se extiende la presente, a los un días del mes de noviembre de dos mil diecinueve.


José Augusto Hernández Funes
NOTIFICADOR
IAIP



